

012.704
C II
III

I N D I C E

I - NOTA DE ELEVACION

II - PROYECTO DE LEY
REGISTRO Y HONORARIOS PARA AUXILIARES DE LA JUSTICIA
(SISTEMA ALTERNATIVO)

- PROYECTO DE MENSAJE A LA CAMARA DE DIPUTADOS

III- PROYECTO DE LEY
DESREGULACION DE LA MATRICULA PROFESIONAL

- PROYECTO DE MENSAJE A LA CAMARA DE DIPUTADOS

IV - ANTECEDENTES:

- A) LEY PROVINCIAL Nº 1366- SOBRE VIGENCIA EN LA PROVINCIA DEL DECRETO NACIONAL Nº 2284/91;
- B) LEY PROVINCIAL Nº 1395- COMPLEMENTARIA DE LA LEY 1366;
- C) LEY PROVINCIAL Nº 1499- PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO;
- D) DECRETO NACIONAL Nº 1813/92- REGISTRO Y HONORARIOS DE PERITOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA;
- E) DECRETO NACIONAL Nº 2393/92- DESREGULACION DE LA MATRICULA PROFESIONAL;
- F) PROYECTO PRESENTADO POR EL MINISTRO BARRA, SOBRE REGISTRO Y HONORARIOS PARA AUXILIARES DE LA JUSTICIA.

MFN-27

41727

ES COPIA

Señor Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos
de la Provincia de La Pampa
Dr. Ernesto Osvaldo FRANCO
Su Despacho

Elevo a Ud. el Informe Final correspondiente al contrato oportunamente suscripto con el Consejo Federal de Inversiones, que el mismo denominó "Formulación de proyectos de leyes referidas a diversas temáticas en el marco del Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas". El informe comprende dos trabajos: un proyecto de ley referido a la creación de un Registro de Auxiliares de la Justicia y normas relativas al pago de los honorarios correspondientes a los mismos; y un proyecto de ley sobre desregulación de la matrícula profesional.

A pesar de que el contrato no lo exige, he considerado necesario proyectar los respectivos mensajes para elevación a la Legislatura, suministrando al Poder Ejecutivo al menos el contenido explicativo de los proyectos desde el punto de vista técnico, sin perjuicio de que en ese ámbito se realicen las adecuaciones que puedan corresponder al estilo y a la oportunidad del dictado de las normas en el contexto de la respectiva política en la materia.

Para ambos proyectos se tuvieron en cuenta las normas vigentes, pero especialmente las disposiciones nacionales contenidas en los decretos: n.º 1813/92, referido a los honorarios de peritos, martilleros y demás auxiliares de la Justicia y creación de un Registro en jurisdicción del Poder Judicial de la Nación; y n.º 2293/92, que trata sobre la habilitación para el ejercicio de la actividad de profesionales universitarios y no universitarios.

El tal sentido, se siguieron las directivas impartidas, motivadas en el compromiso asumido por la Provincia conforme los siguientes antecedentes:

OMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T.º II P.º 177



a) En el Decreto nacional nº 2284/91, se dejaron sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional (art. 1º); se derogó el orden público de los aranceles (art. 8º); se estableció que los peritos designados de oficio para intervenir en un proceso judicial o arbitral, estarán sujetos exclusivamente a los honorarios que se regulen en el proceso (art. 10); y se dejaron sin efecto, en todo el territorio de la Nación, las limitaciones al ejercicio de las profesiones universitarias o no universitarias (art.12);

b) por Ley provincial nº 1366, se declararon vigentes en la Provincia de La Pampa las disposiciones del Decreto nº 2284/92 del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto sean aplicables en su jurisdicción; en forma inmediata las que resulten operativas y comprometiendo el dictado de las normas necesarias para hacer aplicables las disposiciones que no sean operativas en forma inmediata;

c) por decretos Nros. 1813/92 y 2293/92, el Poder Ejecutivo Nacional concretó las disposiciones referidas a peritos y auxiliares de la Justicia y a la matrícula profesional;

d) posteriormente, entre los Gobiernos Provinciales y el Gobierno Nacional, se firmó el "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", que fue ratificado por Ley provincial nº 1499. En ese Acuerdo, con relación a los temas referidos, las Provincias se comprometieron a adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidas en los decretos Nros. 1813/92 y 2293/92, entre otros, adecuándolas al ordenamiento provincial.

En los textos elaborados se ha tratado de respetar al máximo la sustancia de los respectivos decretos nacionales, procurando asimismo la adecuación del régimen a la realidad de la Provincia e incorporando algunas disposiciones que, considero, facilitarán la operatividad de ambos sistemas.

Debe tenerse presente, al considerar los trabajos, que se procura la desregulación, tratando de quitar restricciones y de abaratar los costos de los servicios, pero en el marco de la autonomía provincial, sin menoscabar la competencia que dimana de su soberanía en

materia de procedimientos y en el ejercicio del Poder de Policía sobre las actividades profesionales. Como es obvio, desregulación no significa liberación absoluta de reglamentaciones sino eliminación de regulaciones excesivas, inconvenientes o inadecuadas.

a) Registro y honorarios de peritos y otros auxiliares de la Justicia.

En este tema, el fundamento para la Provincia sería abaratar costos, en el caso, los relativos a procedimientos judiciales y, tal vez más importante, lograr mayor uniformidad en los criterios de regulación de honorarios. Sin embargo, en el ámbito nacional el tema no parece estar absolutamente definido, ya que en el decreto 1813/92 se plantea una desregulación moderada en tanto que existiría otra postura más rigurosa que, a mi criterio, paradójicamente no desregularía sino que constituiría una regulación distinta, pero total.

En efecto, si bien el Gobierno Nacional en el año 1992 creó por decreto un sistema alternativo y limitado a las designaciones de oficio, en el año 1994, con la firma del Ministro de Justicia Dr. Rodolfo Carlos BARRA, ingresó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley en el cual el régimen sería único y excluyente (Senado de la Nación, n° 443/94, folio 184, mensaje 1976/94).

El proyecto de ley no se concretó, por lo que suponemos superado el conflicto y que prevaleció definitivamente el criterio sostenido en el decreto vigente, que creemos es el adecuado y se corresponde con lo resuelto en materia de aranceles en general, en cuyo caso se derogó el orden público al efecto de permitir los pactos surgidos de la libre contratación, pero sin perjuicio de las normas arancelarias como regla tutelar que garantiza bases de igualdad para los supuestos en que no haya pactos. En este caso, la opción de este régimen es voluntaria y, en su defecto, funciona el existente sobre la base de las normas arancelarias comunes.

Compartida esa postura fundamental, el contenido del decreto nacional se considera apropiado sin necesidad de mayores adecuaciones, toda vez que el sistema

procedimental nacional y provincial son iguales. No obstante, han debido realizarse algunas precisiones que no alteran el contenido normativo, además del reajuste de los montos en razón de que el régimen nacional prevé la necesidad de un excedente para pagar una remuneración adicional a los magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial, lo que no corresponde a la temática que se me ha encomendado analizar.

Para realizar el reajuste de valores se optó por reducir del tres por ciento al dos por ciento el monto básico de pago, tomando como razonable ese porcentaje de uno de los proyectos consultados (Provincia de San Luis), que lo indica para los casos de designación de martilleros. A partir de allí, se calcularon con la misma reducción todos los valores, tomando el sesenta y seis por ciento de los establecidos en el decreto nacional.

Como consecuencia de suprimir ese destino dado a los excedentes en la norma nacional, debió preverse una solución para el caso en que al finalizar el ejercicio financiero no sea exactamente igual lo recaudado y lo pagado o devengado y dando por entendido que en la reglamentación que dicte el Superior Tribunal de Justicia se establecerá el sistema de manera que en el caso de haber diferencia no lo será en defecto sino en exceso. A tal efecto, en el artículo doce se prevé que, si hubiera excesos, se destinarán a cubrir gastos de funcionamiento del Poder Judicial, sin descartar la mejor solución que, sin dudas, podrán aportar los expertos en materia presupuestaria.

b) Desregulación de la matrícula profesional.

Conforme la normativa propuesta, cualquier profesional, universitario o no universitario, con domicilio real en otra jurisdicción del país, podrá ejercer su profesión en esta Provincia acreditando la matriculación en el lugar de su domicilio, sin demoras ni costo alguno; correlativamente, cualquier profesional con domicilio real en la Provincia deberá matricularse en ella pero podrá ejercer su profesión en cualquier lugar del país, que tenga una normativa similar en base a las disposiciones nacionales, sin necesidad de matricularse nuevamente, todo lo que respondería al principio de

"matrícula única".

Naturalmente, y como se señalara, se ha preservado el orden y la vigilancia del ejercicio de las profesiones, lo que es de competencia provincial en ejercicio del poder de policía, en la mayoría de los casos delegado en entidades intermedias que lo ejercen con eficacia, obligando al profesional de otra jurisdicción a que realice las acreditaciones ante la autoridad que tenga en la Provincia el gobierno de la matrícula y se someta al control y régimen disciplinario local.

Como novedad, frente a la propuesta nacional, se prevé la habilitación por tiempo limitado, con la finalidad de mantener control sobre la vigencia de la matrícula en el lugar de origen del profesional, en un plano de igualdad con los profesionales locales que deben cumplir requisitos, generalmente anuales, para mantener vigente su matrícula, sin perjuicio de que esa habilitación se renueve por cuantos periodos sea necesario.

También se ha elaborado una norma tendiente a evitar los abusos, peligro siempre presente cuando existe una liberalidad, disponiendo la caducidad del beneficio cuando se acredite sumariamente que el profesional realmente domiciliado en esta Provincia declara un domicilio en otra jurisdicción, donde la matriculación puede ser una mera formalidad sin mayor control y, obtenida la matrícula en ese lugar, la invoca para ejercer aquí.

Para los casos en que un profesional matriculado en esta Provincia sea sancionado en otra jurisdicción donde haya obtenido habilitación para trabajar, se ha previsto que el antecedente disciplinario conste en su legajo personal y, si se tratara de la suspensión o de la cancelación de dicha habilitación, que el antecedente sea informado ante cualquier otra gestión que realice el profesional para obtener habilitación en otra jurisdicción.

Por otra parte, no se considera necesaria la disposición contenida en la primer parte del artículo tercero del Decreto nacional nº 2293/92, que prevé casos de matriculación en jurisdicciones ajenas al lugar

del domicilio real del profesional, obtenidas con anterioridad al dictado de la norma, por cuanto crea una excepción que no se considera justificada. Siendo la matriculación absolutamente voluntaria, de manera que quien pueda encontrarse en esa situación, de tener domicilio real en una jurisdicción y no tener matrícula en ella sino en otra, podrá renunciar a esa matriculación y obtener la correspondiente a su domicilio real que lo habilitaría para ejercer en todo el país.

Respecto de las normas contenidas en los artículos 39 y 42 del Decreto nacional nº 2293/92, constituye materia entroncada con las previsiones del artículo 72 de la Constitución Nacional, por lo que su tratamiento, en principio, es propio de la legislación nacional. Por otra parte, la posibilidad de que actos instrumentados en otra jurisdicción tengan efectos jurídicos en ésta, excede lo estrictamente referido a desregulación de la matrícula, que supone la posibilidad de trabajar en esta jurisdicción sin el requisito de una nueva matriculación. En lo que es de competencia de la Provincia, si se resolviera avanzar en el tema es aconsejable actuar con la máxima prudencia, no advirtiéndose cómo podría admitirse la validez de actos jurídicos presuntamente emanados de profesionales matriculados en otra jurisdicción sin más intervención que la de la autoridad registral, lo que no admitiría siquiera la comprobación de la autenticidad de la matrícula o del título invocado o el control del cumplimiento del pago de gravámenes fiscales.

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración.

SANTA ROSA, La Pampa, Junio de 1996.-

OMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T° II F° 177

REGISTRO Y HONORARIOS DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA
SISTEMA ALTERNATIVO

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º..-Créase en jurisdicción del Poder Judicial de la Provincia, un Registro de peritos, martilleros y demás auxiliares de la Justicia, para designaciones de oficio con el objeto de la producción de pruebas a petición de parte y demás tareas vinculadas al ejercicio de la función jurisdiccional. La inscripción en este Registro significará la adhesión al régimen especial creado por la presente ley. Este régimen operará como alternativo, conforme lo establecido en el artículo 4º.

Artículo 2º..-Hasta tanto se concreten los listados del Registro a que se refiere el artículo primero, y por un plazo de hasta un (1) año contado a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, cuando las partes opten por el régimen especial de la misma se podrá solicitar a los magistrados intervinientes la selección de auxiliares de entre las listas actualmente en vigencia. En tales casos, la designación quedará sujeta a la condición suspensiva de que, al tiempo de la aceptación del cargo conferido, el auxiliar de la justicia exprese su aceptación del sistema previsto en esta ley.

Artículo 3º..-Los inscriptos en el Registro creado en el artículo primero, como asimismo quienes no estando en él, acepten realizar su labor con ajuste al régimen correspondiente al mismo, no percibirán honorarios por su actuación conforme las respectivas normas arancelarias, sino que su desempeño será remunerado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y de los reglamentos operativos que al efecto dicte el Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 4º..-La opción entre el sistema de producción de la prueba pericial previsto en esta ley y el sistema existente hasta la fecha de vigencia de la misma, o el que lo sustituya, podrá ser libremente formulada por cualquiera de las partes:

a) En oportunidad de ofrecer la prueba pericial o en la oportunidad en que deba expedirse sobre la pedida por la

parte contraria;

b) hasta dentro de los cinco (5) días posteriores a la designación judicial de los auxiliares de la justicia, siempre que la designación no se hubiera notificado.

La elección del presente régimen formulada por cualquiera de las partes, lo hará obligatorio para todas las demás.

Artículo 59..-Será condición para la elección del régimen creado en al presente ley, que cada parte que lo solicite deposite, en la forma indicada en el artículo 69, el dos por ciento (2 %) del monto reclamado en la demanda, por cada perito o auxiliar que se requiera. El gasto integrará las costas del proceso.

Cuando el porcentaje indicado en el párrafo precedente resulte inferior a doscientos pesos (\$ 200.-) se deberá depositar esta suma por cada perito o auxiliar solicitado. En los casos en que el perito o auxiliar sea designado de oficio por el juez, el pago lo harán las partes en forma proporcional, sin perjuicio de lo que se resuelva respecto de las costas del juicio.

En los casos de procesos de monto indeterminado o sin contenido económico, corresponderá depositar la suma de trescientos treinta pesos (\$ 330.-) por cada perito o auxiliar, excepto que por resolución fundada en la elevada complejidad de las operaciones a realizarse el juez de la causa fije un monto superior.

Para el supuesto de martilleros, el porcentaje se aplicará sobre el monto de la base fijada para la subasta, salvo cuando no hubiera base o la venta se realizara por un monto menor al de la base, en cuyos casos el porcentaje se aplicará sobre el precio de venta.

Artículo 69..-El pago se efectuará de la siguiente manera:

- a) Respecto de los nombramientos de peritos, a requerimiento de parte o de oficio, en dos (2) cuotas:
- la primera, por el cincuenta por ciento (50%) del total, deberá ser depositada hasta el quinto día de haber quedado firme el auto de designación del experto y con anterioridad a su aceptación del cargo;
 - la segunda cuota, consistente en el restante cincuenta por ciento (50%), deberá pagarse al tiempo del cumplimiento de la sentencia definitiva, en igual proporción a la condena en costas. La integración de

esta segunda cuota será requisito previo a cualquier retiro de fondos o documentación del expediente, a todo levantamiento de medidas cautelares que se dispusiera con posterioridad a la sentencia definitiva, así como el archivo del expediente. También será recaudo previo a la homologación de todo acuerdo transaccional por los magistrados intervinientes;

- b) En el caso de los martilleros se descontará del resultado de la subasta, siendo el martillero designado el responsable de efectuar el depósito correspondiente, dentro de los dos (2) días de realizada la misma. La falta de depósito generará la responsabilidad personal y patrimonial del martillero, como administrador de bienes ajenos.

La falta de depósito de la tasa fijada, en cualquiera de los plazos establecidos en el inciso a), importará el tácito desistimiento de la opción por el sistema de la presente ley.

Artículo 79.—En los procesos en que una de las partes obtuviera el beneficio de litigar sin gastos para hacer uso de este servicio, la contraparte deberá depositar hasta seiscientos sesenta pesos (\$ 660.-) por cada uno de los auxiliares, como primera cuota, en los casos en que el monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del porcentaje establecido en el artículo 59 supere dicha suma.

Artículo 80.—Cuando por el monto resultante de la sentencia definitiva del proceso resulte que deba integrarse una suma mayor, por diferencia o por que se establezca por resolución fundada del juez, ésta se estimará y pagará al momento de liquidarse las costas del proceso, siendo exigible únicamente al condenado en costas.

Artículo 90.—Para los procesos laborales y de seguridad social, se establece como tope de la primera cuota la suma de trescientos treinta pesos (\$ 330.-) por cada auxiliar, siendo de aplicación lo establecido en el artículo anterior.


Artículo 10.—Los topes previstos en esta ley podrán ser elevados, en cada caso, por resolución fundada del juez de la causa basada únicamente en la complejidad de

la pericia a realizar.

Artículo 11.-Los fondos que se recauden por aplicación de la presente ley se destinarán al pago de las remuneraciones de los integrantes del Registro que se crea y en la medida de sus actuaciones, conforme la reglamentación a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 12.-El Superior Tribunal de Justicia establecerá las normas operativas del Registro de Peritos y Auxiliares de la Justicia, los requisitos y formalidades para integrar las listas respectivas, las disposiciones concernientes a la organización y funcionamiento del régimen para realización de las pruebas periciales, actividad de los martilleros y demás auxiliares de la justicia, y la forma y condiciones en que los peritos y auxiliares serán remunerados. Anualmente, liquidadas las remuneraciones correspondientes, los excedentes se destinarán a gastos de funcionamiento del Poder Judicial.

Artículo 13.-De forma.


OMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T° II F° 177

REGISTRO Y HONORARIOS DE PERITOS Y OTROS AUXILIARES DE LA JUSTICIA

PROYECTO DE MENSAJE

SANTA ROSA.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

El Poder Ejecutivo remite a la consideración de esa Honorable Cámara de Diputados, el adjunto proyecto de ley por la que se crearía, en el ámbito del Poder Judicial, un Registro de peritos, martilleros y demás auxiliares de la Justicia, para designaciones de oficio cuando las partes en juicio soliciten la producción de pruebas o la realización de otras tareas vinculadas al ejercicio de la actividad jurisdiccional.

En este Registro se inscribirían los auxiliares de la Justicia que decidan trabajar por los honorarios que les regule el Poder Judicial sin tener en cuenta las leyes de aranceles profesionales.

El sistema no sería sustitutivo del que rige actualmente, sino que funcionaría como alternativo pudiendo las partes optar por uno u otro. Si optaran por el sistema que se propone, quedarían obligados a efectuar depósitos que formarían un fondo para pagar los honorarios a los auxiliares de la Justicia que sean designados de la lista integrada voluntariamente por los mismos. Los honorarios serían determinados por el Juez de la causa, sobre la base de estas normas y del reglamento operativo que dicte el Superior Tribunal de Justicia.

Los porcentajes y, en su caso, las sumas fijas establecidas en el proyecto, significarían una reducción de costos en el proceso judicial. Por ejemplo, los martilleros, de acuerdo con su ley de aranceles, perciben el tres por ciento del monto de las subastas, en cambio, conforme al proyecto, en los casos de subastas solamente se depositaría el dos por ciento abaratándose el costo del proceso; sin perjuicio de ello, ese dos por ciento no se destinaría directamente al pago del martillero sino a la


OMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T° II F° 177

formación del fondo del se extraería la suma para pagar los honorarios que fije el Juez que, en casos, podría ser superior a ese porcentaje pero sin encarecer el proceso sino como consecuencia de una distribución equitativa de lo recaudado, en relación con el trabajo real del auxiliar de la Justicia.

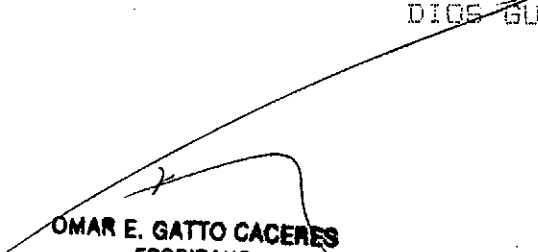
El sistema es el mismo adoptado por el Gobierno Nacional mediante Decreto nº 1813/92 con algunas adecuaciones que no alteran el contenido esencial, considerando el compromiso asumido por la Provincia en el "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", ratificado por Ley nº 1499, en el cual, las Provincias firmantes se comprometieron a adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidas, entre otros, por el referido Decreto nº 1813/92 y teniendo en cuenta que nuestro régimen procesal es igual al nacional.

Sin embargo, puede apreciarse una diferencia importante en los montos a depositar, que se estimaron en el sesenta y seis por ciento de los establecidos por la Nación, a consecuencia de haber eliminado del sistema una recaudación extra prevista en el decreto nacional para pagar una remuneración adicional a magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial, lo que se considera inapropiado en la Provincia.

La eliminación de ese destino para los excedentes obligó a prever una norma según la cual, de haber excesos al finalizar cada ejercicio, se destinarán a gastos de funcionamiento del Poder Judicial.

El proyecto se corresponde con el compromiso contraído por la Provincia y se estima adecuado a la realidad de su sistema procedimental, por lo que se solicita la aprobación de ese honorable Cuerpo Legislativo.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONRABILIDAD


OMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T° II F° 177

DESREGULACION DE LA MATRICULA PROFESIONAL

PROYECTO DE LEY

Artículo 19.-Todo profesional universitario o no universitario con matrícula vigente en cualquier jurisdicción del país donde tenga su domicilio real, siempre que en ella exista recíprocamente la liberación que se establece en la presente ley, podrá ejercer su profesión en esta Provincia sin una nueva matriculación, previa intervención de la entidad que tenga el gobierno de la matrícula en esta jurisdicción.

Artículo 20.-La habilitación, si correspondiere, será otorgada por la entidad encargada de la matriculación, sin cargo económico alguno ni requisitos que signifiquen mayor demora que la confirmación de la vigencia de la matrícula de origen, los datos personales del interesado y la existencia y operatividad de la norma específica, análoga a la presente, vigente en la jurisdicción de la matrícula acreditada. La habilitación se extenderá por períodos expresamente determinados, antes de cuya finalización el interesado deberá acreditar que se mantiene vigente la matriculación en la jurisdicción de su domicilio real; tales períodos, deberán coincidir en su duración con los que estén establecidos para que los matriculados en la Provincia cumplan los requisitos establecidos para mantener vigente su matrícula.

Artículo 32.-El profesional no estará obligado a matricularse ni a pagar cuota de matriculación ni, en su caso, a colegiarse ni a pagar cuota de colegiación, pero quedará sujeto al régimen disciplinario propio de la matriculación y demás normas que reglamenten el ejercicio profesional en esta Provincia. En tal sentido, deberá cumplir toda obligación que corresponda como si estuviera matriculado en esta Provincia.


En caso de inconducta, si correspondiera la suspensión o cancelación de la matrícula, se aplicará la medida en relación con la habilitación concedida. Toda sanción se comunicará a la entidad que otorgó la matrícula dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de quedar firme la medida.

Artículo 49.-En caso en que el profesional registre su domicilio real en otra jurisdicción e invoque su matriculación en ella, si se comprueba en forma sumaria que en realidad se domicilia en esta Provincia, la entidad que tenga el gobierno de la matrícula declarará la caducidad de la habilitación y registrará el antecedente como una falta grave debiendo comunicarla en la forma establecida en el artículo anterior.

Artículo 50.-En los casos de sanciones aplicadas en otra jurisdicción a matriculados en ésta, la entidad encargada de juzgar las faltas disciplinarias registrará el caso como antecedente disciplinario en su legajo, sin perjuicio de otras medidas que corresponda tomar de acuerdo con las circunstancias del caso y, en los supuestos de suspensión o cancelación de la habilitación concedida, informará el antecedente a la entidad ante la que se gestione habilitación en otra jurisdicción.

Artículo 69.-La presente ley no se aplicará en los casos en que el domicilio real en esta Provincia sea requisito para el ejercicio de la actividad profesional.

Artículo 79.-De forma.-


OMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T° II F° 177

DESREGULACION DE LA MATRICULA PROFESIONAL

PROYECTO DE MENSAJE

SANTA ROSA.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

El Poder Ejecutivo remite a la consideración de esa Honorable Cámara de Diputados el adjunto proyecto de ley, por la que se desregularía la matrícula para el ejercicio de las profesiones universitarias o no universitarias en esta Provincia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional nº 2264/91 al que la Provincia adhirió mediante ley nº 1366, y especialmente en el "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", que la Provincia ratificó por ley nº 1499. En el Acuerdo referido, las Provincias firmantes se comprometieron a adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidas en el Decreto nº 2293/92, entre otros, adecuándolas al ordenamiento provincial.

En el mencionado Decreto nº 2293/92, el Gobierno Nacional estableció la desregulación de la matrícula profesional de manera de posibilitar que cualquier profesional matriculado en la jurisdicción de su domicilio real, pueda ejercer su profesión en cualquier lugar del país sin necesidad de una nueva matriculación. El propósito es el de abaratar costos en la prestación de los servicios profesionales y de evitar regulaciones excesivas que limitan la posibilidad de trabajo.

En el proyecto elaborado se ha tomado la sustancia del referido Decreto Nacional, haciendo de aplicación en la Provincia la liberación del requisito de doble matriculación, pero procurando la adecuación a nuestra realidad, condicionando la aplicación del régimen, en cada caso en particular, a la existencia de norma análoga en la jurisdicción de origen de la matrícula, de manera de que exista reciprocidad, y sujetando el procedimiento a requisitos simples, que no significan costo ni demora, y aseguran la posibilidad del ejercicio del

OMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T° II F° 177

poder de policía sobre la actividad profesional por parte de la autoridad provincial que tiene el gobierno de la matrícula, de la profesión de que se trate.

Se prevé la autorización por plazo determinado, de manera de controlar la subsistencia de la matrícula en la jurisdicción donde se la concedió y respetando, en tal sentido, el principio de igualdad respecto de los profesionales matriculados en esta Provincia, sin perjuicio de la renovación de la habilitación cuantas veces se solicite mientras se mantenga la situación que lo permite.

Asimismo, se crea una norma tendiente a evitar los abusos, peligro siempre presente cuando existe una liberalidad, disponiendo la caducidad del beneficio cuando se acredite sumariamente que un profesional realmente domiciliado en esta Provincia ha declarado un domicilio en otra jurisdicción, donde la matriculación puede ser una mera formalidad sin mayor control y, obtenida la matrícula en ese lugar, la ha invocado para ejercer en esta jurisdicción. Para el caso en que el profesional realmente domiciliado en otra jurisdicción cambie su domicilio a ésta, la operatividad de la norma no lo perjudica, toda vez que puede obtener su matrícula en esta Provincia y cancelar la otra, manteniéndose el principio de matrícula única correspondiente al domicilio real.

Concordantemente con el respeto a tal principio, no se recepta la disposición contenida en el Decreto Nacional sobre la posibilidad de que quien tenga, a la fecha de sanción de ese Decreto, una sola matrícula en otra jurisdicción distinta a la del domicilio real, pueda conservarla y hacerla valer como si fuera originaria del lugar de su domicilio. Se considera que de manera alguna se justifica quebrantar el principio mencionado y correr el riesgo de la especulación, ante la simplicidad de la situación en la cual el interesado puede cancelar una matriculación y obtener otra, siempre única, correspondiente a la jurisdicción de su domicilio real.


Para los casos en que un profesional matriculado en esta Provincia sea sancionado en otra jurisdicción, se ha previsto que el antecedente disciplinario conste en su legajo personal y, si se tratara de la suspensión o

cancelación de la habilitación concedida, sea informado ante cualquier otra gestión que realice el profesional solicitando habilitación en otra jurisdicción.

Las disposiciones contenidas en el Decreto Nacional, referidas a validez de actos jurídicos instrumentados en otras jurisdicciones, si bien guardan cierta conexión temática con la matrícula profesional, no constituyen específicamente parte de la problemática tratada en el proyecto y mas bien entroncan con las previsiones del artículo 79 de la Constitución Nacional constituyendo materia que debe ser considerada separadamente, sólo en la medida de la competencia provincial, con gran cuidado por las dificultades que presentaría la comprobación de la autenticidad de matrículas, títulos y formas, y salvando la necesidad de controlar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El proyecto elaborado se corresponde con el compromiso contraído y es adecuado a la necesidad, que se comparte, de facilitar el ejercicio de las actividades profesionales y de abaratar costos, por lo que se solicita la aprobación de ese honorable Cuerpo Legislativo.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD



UMAR E. GATTO CACERES
ESCRIBANO
PROCURADOR T° II F° 177



Santa Rosa-Dto. 25
Correo Argentino
Oficina de
Imposición

FRANQUEO A PAGAR

Cta. N° 14 — Dto. 25

TARIFA REDUCIDA

Concesión Nro. 2/Dto. 25

Propiedad Intelectual n° 187332

BOLETIN OFICIAL

DE LA

Provincia de La Pampa

REPUBLICA ARGENTINA

Gobernador	Dr. Rubén Hugo MARIN
Vice-Gobernador	Dr. Manuel Justo BALADRON
Ministro de Gobierno y Justicia	Dr. Heriberto Eloy MEDIZA
Ministro de Bienestar Social	Sra. Silvia Esther GALLEGÓ de SOTO
Ministro de Cultura y Educación	C.P.N. Luis Ernesto ROLDAN
Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas	C.P.N. Osvaldo Luis DADONE
Ministro de Asuntos Agrarios	Dr. Carlos Alberto MEDRANO
Ministro de Obras y Servicios Públicos	Arg°. Hugo Nelson AGUERO
Secretario General de la Gobernación	Sr. Cándido Hipólito DIAZ
Asesor Letrado de Gobierno	Dr. José Luis ALVAREZ
Fiscal de Estado	Dr. Pedro Mario ZUBILLAGA

Dirección: Sarmiento n° 335 T.E. 0954-22930
AÑO XXXIX — Nro. 1935.-

SANTA ROSA, 10 de Enero de 1992.-

S U M A R I O

	Página
LEY N° 1361 — Instituyendo el Premio "Producción Provincia de La Pampa".....	42
LEY N° 1363 — Creando el "Programa Provincial de Procreación Responsable".....	42
LEY N° 1364 — Ratificando el Convenio Celebrado entre el Instituto de Seguridad Social de la Provincia y Lotería Nacional Sociedad del Estado.....	43
LEY N° 1368 — Declarando Vigentes en la Provincia las Disposiciones del Decreto N° 2284/91 del Poder Ejecutivo Nacional.....	45
LEY N° 1370 — Facultando a la Dirección Provincial de Vialidad a Abonar Diferencias Salariales.....	45
Decreto N° 27 — Modificando los Artículos 230, 240, 320, 370 y 380 del Decreto N° 2175/85.....	46
Decretos Sintetizados: (Nros. 3158, 116, 160 a 174, 177, 178, 180, 183 a 194, 198 a 201).....	48
Designaciones: (Nro. 182).....	51
Ministerio de Gobierno y Justicia: (Res. Nro. 196).....	51
Ministerio de Bienestar Social: (Res. Nros. 215, 217, 229, a 231 y 233).....	51
Ministerio de Cultura y Educación: (Res. Nros. 522, 11 a 13, 15 y 16).....	51
Subsecretaría de Cultura: (Disp. Nro. 11).....	52
Dirección General de Educación Inicial y Primaria: (Disp. Nro. 323).....	62
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas: (Res. Nros. 171 a 176).....	62
Subsecretaría de Hacienda.....	62
Dirección General de Rentas: (Res. Conj. Rentas y Catastro).....	62
Dirección General de Catastro: (Disp. Nros. 296, 298 a 301).....	63
Ministerio de Obras y Servicios Públicos: (Res. Nros. 104, 109, 113, 003 a 006).....	64
Asesoría Letrada de Gobierno: (Res. Nro. 15).....	64
Instituto de Seguridad Social: (Res. Nros. 1287 y 1334).....	64
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda: (Res. Nros. 16, 452 a 461).....	55
Municipalidad de Santa Rosa: (Res. Nro. 114).....	57
Licitaciones:.....	58
Avisos Judiciales:.....	59
Sección Comercio, Industria y Entidades Civiles:.....	64

LEY Nº 1366 — DECLARANDO VIGENTES EN LA PROVINCIA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO Nº 2284/91 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL.

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.— Decláranse vigentes en la Provincia de La Pampa las disposiciones del Decreto nº 2284/91 del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto sea aplicable en su jurisdicción.

Artículo 2º.— Sin perjuicio de la operatividad de las disposiciones a que se refiere el artículo 1º que sean aplicables en forma inmediata, a partir de la fecha de publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo adecuará la normativa provincial correspondiente al contenido del decreto nacional, remitiendo a la Cámara de Diputados los proyectos de leyes respectivos en los casos que excedan el marco de su competencia.

Artículo 3º.— Invítase a los Municipios de la Provincia, a adherir al régimen sancionado por la presente Ley en lo que a ellos les corresponda.

Artículo 4º.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintisiete días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Ing. Eden Primitivo Cavallero, Vice-Gobernador, Presidente H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa; Oscar G. Somoza, Pro-Secretario H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.

Expediente nº 6021/91.

Santa Rosa, 18 de Diciembre de 1991

Por tanto:

Téngase por Ley de la Provincia. Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese. Decreto nº 121.

Dr. Rubén Hugo Marín, Gobernador de La Pampa; Cr. Osvaldo Luis Dadone, Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas.

Secretaría General de la Gobernación: 18 de diciembre de 1991.

Regístrada la presente Ley, bajo el número mil trescientos sesenta y seis (1.366).

Cándido Hipólito Díaz, Secretario General de la Gobernación.

LEY Nº 1370 — FACULTANDO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD A ABONAR DIFERENCIAS SALARIALES.

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.— Facúltase a la Dirección Provincial de Vialidad, en las condiciones que la misma establezca, a abonar a los empleados de ese organismo que estuvieron en condiciones de percibir las diferencias salariales provenientes de la escala, según la interpretación judicial de la Norma Jurídica de Facto nº 1266 y lo que efectivamente cobraron durante el período comprendido entre los meses de noviembre de 1984 y julio de 1988 inclusive, y que no lo obtuvieran por sentencia judicial.

Artículo 2º.— Esa diferencia se abonará de acuerdo a las posibilidades de los recursos presupuestarios de la Dirección Provincial de Vialidad como crédito legítimo y previa conformidad que se le exigirá a cada uno de los empleados.

Artículo 3º.— Quedan expresamente excluidos de los artículos anteriores los importes correspondientes a intereses, costas, honorarios o cualquier otro tipo de gastos.

Artículo 4º.— El gasto que demande atender el monto total que se determine, será

afectado a los recursos del presupuesto para lo cual se autoriza al Poder Ejecutivo a reestructurar las partidas de sueldos de la Dirección Provincial de Vialidad.

Artículo 5º.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veinueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Ing. Eden Primitivo Cavallero, Vice-Gobernador, Presidente H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa; Oscar G. Somoza, Pro-Secretario H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.

Expediente nº 6022/91.

Santa Rosa, 18 de Diciembre de 1991

Por tanto:

Téngase por Ley de la Provincia. Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese. Decreto nº 122.



Santa Rosa-Dto. 25
Correo Argentino
Oficina de
Imposición

FRANQUEO A PAGAR
Cta. N° 14 — Dto. 25

TARIFA REDUCIDA
Concesión Nro. 2/Dto. 25

Propiedad Intelectual n° 187332.

BOLETIN OFICIAL

DE LA

Provincia de La Pampa

REPUBLICA ARGENTINA

Gobernador	Dr. Rubén Hugo MARIN
Vice-Gobernador	Dr. Manuel Justo BALADRON
Ministro de Gobierno y Justicia	Dr. Heriberto Eloy MEDIZA
Ministro de Bienestar Social	Sra. Silvia Esther GALLEG0 de SOTO
Ministro de Cultura y Educación	C.P.N. Luis Ernesto ROLDAN
Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas	C.P.N. Osvaldo Luis DADONE
Ministro de Asuntos Agrarios	Dr. Carlos Alberto MEDRANO
Ministro de Obras y Servicios Públicos	Arq°. Hugo Nelson AGÜERO
Secretario General de la Gobernación	Sr. Cándido Hipólito DIAZ
Asesor Letrado de Gobierno	Dr. José Luis ALVAREZ
Fiscal de Estado	Dr. Pedro Mario ZUBILLAGA

Impresión: Sarmiento n° 335 Tel. 0954-22930
BO XXXIX — Nro. 1968.-

SANTA ROSA, 28 de Agosto de 1992

SUMARIO

	Página
LEY N° 1395 — Normas Complementarias de la Ley 1366, relacionadas con la Operatividad en la Provincia de los Artículos 8° y 9° del Decreto Nacional 2284/91	1054
Decreto N° 1450 — Aprobando el Programa "Transformación de la Educación a través de la Descentralización del Sistema Educativo"	1054
Decretos Sintetizados: (Nros. 1530 a 1547, 1549 a 1573, 1575 a 1595)	1056
Ministerio de Gobierno y Justicia: (Res. Nros. 133, 134, 138 y 139)	1062
Subsecretaría de Trabajo: (Disp. Nro. 20)	1063
Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas: (Res. Nros. 42 a 46)	1063
Ministerio de Cultura y Educación: (Res. Nros. 155, 192 a 195)	1063
Dirección General de Educación Inicial y Primaria: (Disp. Nros. 177 a 181)	1064
Dirección General de Educación Media y Superior: (Disp. Nros. 775, 841, 847 y 854)	1064
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas	
Contaduría General: (Res. Nros. 135, 136, 140 a 142)	1065
Subsecretaría de Hacienda	
Dirección General de Catastro: (Disp. Nros. 111 a 113)	1065
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda: (Res. Nros. 211 a 217 y 238)	1066
Municipalidad de Santa Rosa: (Ordenanzas Nros. 1078 y 1079)	1067
Licitaciones:	1069
Avisos Judiciales:	1072
Sección Comercio, Industria y Entidades Civiles:	1083

LEY Nº 13957 — NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA LEY 1366, RELACIONADAS CON LA OPERATIVIDAD EN LA PROVINCIA DE LOS ARTICULOS 8º Y 9º DEL DECRETO NACIONAL 2284/91.—

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA CON FUERZA DE LEY :

Artículo 1º.— La operatividad en la Provincia de los artículos 8º y 9º del decreto nacional Nº 2284/91, de aplicación en esta jurisdicción de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 1366, queda sujeta a las siguientes normas:

- a) La supresión del orden público en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones u otra forma de retribución de servicios profesionales no comprendidos en la legislación laboral o en convenios colectivos de trabajo, tiene como único efecto el de posibilitar acuerdos entre las partes contratantes del servicio que podrán pactar libremente los porcentuales o montos de retribución, sin perjuicio de la obligatoriedad de las normas respecto de terceros y de los jueces;
- b) entiéndese que el cobro de la matrícula, cuota social o de otras sumas de dinero por conceptos análogos, por parte de entidades públicas o privadas, ha sido pactado libremente, cuando ello se haya resuelto en Asamblea reunida en forma legal.

Artículo 2º.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Pampa, en Santa Rosa, a los seis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos.—

Dr. Manuel Justo Baladrón, Presidente H. Cámara de Diputados Provincia de Pampa — Dr. Mariano A. Fernández, Secretario Legislativo — H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.—

EXPEDIENTE Nº 4226/92.

SANTA ROSA, 14 de Agosto de 1992

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Provincia. Dese Registro Oficial y al Boletín Oficial, complase, comuníquese, publíquese y archívese.

DECRETO Nº 1548.—

Dr. Rubén Hugo Marín, Gobernador de La Pampa — Cr. Osvaldo Luis Dadone, Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas — Secretaria General de la Gobernación, 14 de Agosto de 1992.—

Registrada la presente Ley, bajo el número MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (1.395).—

Cándido Hipólito Díaz, Secretario General de la Gobernación.—

Decretos del Poder Ejecutivo Provincial

DECRETO Nº 1450 — APROBANDO EL PROGRAMA "TRANSFORMACION DE LA EDUCACION A TRAVES DE LA DESCENTRALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO".—

SANTA ROSA, 29 de Julio de 1992

VISTO:

El Programa "Transformación de la Educación a través de la descentralización del Sistema Educativo" elaborado por el Ministerio de Cultura y Educación, y

CONSIDERANDO:

Que los procesos de descentralización-regionalización han sido definidos por esta conducción como medios prioritarios para el mejoramiento de la calidad del servicio educativo;

Que la Declaración Mundial sobre Educación para todos y el Proyecto Principal para América Latina de la UNESCO expresan que la Descentralización constituye un

marco con fuertes potencialidades para incentivar la participación de los nuevos actores, la adaptación curricular, la responsabilidad de los resultados de los procesos educativos y la eficacia administrativa;

Que esta concepción, basada en la delegación del poder y competencias a los diversos sectores sociales involucrados en la cuestión educativa, intenta rescatar el protagonismo y compromiso de las instituciones locales y regionales;

Que los tres Proyectos que componen el Programa, a) Regionalización de la Coordinación; b) Fortalecimiento Institucional; c) Participación Comunitaria constituyen propuestas de acción sobre la realidad, conducentes al logro de los objetivos del Programa.

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA :

Artículo 1º.— Aprobar el Programa "Tra

formación de...
centralizack...
borado por...
Anexo...
Artículo 2º...
zonas de Co...
y las res...
Artículo 3º...
tura y Ed...
ciones admin...
de ejecuc...
programa...
Artículo 4º...
rendado por...
Educación...
Artículo 5º...
Boletín Ofic...
al Minist...
sus efectos...
MARIN —
DENOMINACIO...
FORMACION D...
DE LA DESCEN...
Justificación:
El proceso...
ción que ha...
La Pampa e...
políticos de...
región-regio...
para el...
Esta conce...
poder y com...
ores sociales...
educativa Inter...
de las instituc...
centrarrestar lo...
ismo que hi...
El crecimie...
modelo adminis...
oluciones rápid...
funcionamie...
la posibilid...
decisiones y la...
una nueva y gr...
a través de...
participación...
En tal sent...
tribución de...
nanciales y de...
tendient...
idades de co...
los niveles y...
cumpliendo un...
demandas al sis...
a la sociedad...
La sociedad...
capacidad de...
esta al incre...
experimentada...
nuestros pueblo...
juntamente al Es...
y/o mantenimie...
tivos. Se trat



Santa Rosa-Dto. 25
Correo Argentino
Oficina de
Imposición

FRANQUEO A PAGAR

Cta. N° 14 — Dto. 25

TARIFA REDUCIDA

Concesión Nro. 2/Dto. 25

Propiedad Intelectual n° 187332.

BOLETIN OFICIAL

DE LA

Provincia de La Pampa

REPUBLICA ARGENTINA

Gobernador	Dr. Rubén Hugo MARIN
Vice-Gobernador	Dr. Manuel Justo BALADRON
Ministro de Gobierno y Justicia	Dr. Heriberto Eloy MEDIZA
Ministro de Bienestar Social	Sra. Silvia Esther GALLEG0 de SOTO
Ministro de Cultura y Educación	C.P.N. Luis Ernesto ROLDAN
Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas	C.P.N. Osvaldo Luis DADONE
Ministro de Asuntos Agrarios	Dr. Carlos Alberto MEDRANO
Ministro de Obras y Servicios Públicos	Arqº. Hugo Nelson AGUERO
Secretario General de la Gobernación	Sr. Cándido Hipólito DIAZ
Asesor Letrado de Gobierno	Dr. José Luis ALVAREZ
Fiscal de Estado	Dr. Pedro Mario ZUBILLAGA

Dirección: Sarmiento n° 335

AÑO XL — Nro. 2026.

SANTA ROSA, 8 de Octubre de 1993.

SUMARIO

	PAGINA
Ley n° 1496 — Ratificando Convenio entre la Provincia y la Municipalidad de Santa Rosa, sobre Transferencia de Inmuebles	1346
Ley n° 1499 — Ratificando el Acuerdo Denominado "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento"	1347
Decretos Sintetizados: (Nros. 1846 a 1855, 1859 a 1863, 1865 a 1902 y 1906)	1351
Ministerio de Gobierno y Justicia	
Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas: (Res. nros. 183 a 191)	1356
Ministerio de Bienestar Social: (Res. nros. 490 a 494, 497, 502 a 504)	1357
Ministerio de Cultura y Educación: (Res. nros. 350, 352 a 359)	1358
Dirección General de Educación Inicial y Primaria: (Disp. nros. 180 a 187)	1358
Dirección General de Educación Media y Superior: (Disp. nro. 1572)	1359
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas	
Contaduría General: (Res. nros. 180 a 188)	1359
Subsecretaría de Hacienda	
Dirección General de Rentas: (Res. Gral. nro. 20)	1360
Dirección General de Catastro: (Disp. nros. 207, 209, 210, 212 y 213)	1361
Dirección de Minas: (Disp. minera nros. 74 a 76)	1362
Ministerio de Obras y Servicios Públicos: (Res. nros. 116 a 119)	1362
Instituto Provincial Autárquico de Vivienda: (Res. nros. 287 a 295)	1362
Instituto de Seguridad Social	
DAFAS: (Res. nros. 823 a 825)	1364
Municipalidad de Santa Rosa: (Ordenanzas nros. 1292 a 1297)	1365
Licitaciones:	1370
Avisos Judiciales:	1375
Sección Comercio, Industria y Entidades Civiles:	1386

dio 1, Manzana 76, Parcela 2; Manzana 78, Parcela 2; Manzana 82, Parcela 2; Manzana 89, Parcela 1; Manzana 87, Parcela 1; Manzana 83, Parcela 1; serán destinadas por "LA PROVINCIA" para la localización de edificios de uso público, autorizando "LA MUNICIPALIDAD" la modificación al uso establecida para esos inmuebles por la Ordenanza n° 38/82.

CUARTA: Lo convenido en las Cláusulas Primera, Segunda y Tercera, procederá una vez inscriptas las escrituras traslativas de dominio a favor de la Provincia de La Pampa y otorgadas por Ferrocarriles Argentinos, en cumplimiento de los convenios suscriptos por las partes y que fueran ratificados por la Ley Nacional n° 17544 y la Norma Jurídica de Facto Provincial n° 890/78, por ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia.

QUINTA: Con la firma del presente Convenio se deja sin efecto lo establecido en el Artículo 4° del Decreto n° 2971 de fecha 31 de diciembre de 1980. Asimismo, las partes acuerdan dejar sin efecto las Cláusulas 39, 49 y 59 del Convenio suscripto con fecha 22/12/80 entre el entonces Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia y la Municipalidad de Santa Rosa, a las cuales hace alusión el artículo 39 del Decreto n° 2971/80, convirtiéndose el préstamo indicado en este artículo, en aporte no reintegrable.

SEXTA: La vigencia y validez efectiva del presente convenio queda sujeta a la ratificación por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia y del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa.

A todos los fines y efectos indicados precedentemente se firman tres ejemplares de un mismo tenor.

Cr. Oscar Mario JORGE, Intendente Municipal — Cr. Osvaldo Luis Dadone, Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas.

EXPEDIENTE N° 5177/93.

SANTA ROSA, 23 de Setiembre de 1993

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Provincia. Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.

DECRETO N° 1903.

Dr. Rubén Hugo Marín, Gobernador de La Pampa — Dr. Heriberto Eloy Mediza, Ministro de Gobierno y Justicia — Cr. Osvaldo Luis Dadone, Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas.

Secretaría General de la Gobernación, 23 de Setiembre de 1993.

Registrada la presente Ley, bajo el número MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS (1496).

Cándido Hipólito Díaz, Secretario General de la Gobernación.

LEY N° [1499] — RATIFICANDO EL ACUERDO DENOMINADO "PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO" —

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1° — Ratifícase el acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales el 12 de agosto de 1993, denominado "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento", cuya copia autenticada, como Anexo I, forma parte de la presente Ley.

Art. 2° — Autorízase al Poder Ejecutivo para dictar todas las normas que resulten necesarias a efectos de dar cumplimiento al acuerdo ratificado por el artículo anterior.

Artículo 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veinticuatro días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

Dr. Manuel Justo Baladrón, Presidente H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa; Dr. Mariano A. Fernández, Secretario Legislativo, H. Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.

PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO

En la ciudad de Buenos Aires a los doce días del mes de agosto de 1993, se reúnen el Señor Pre-

sidente de la Nación Argentina, Dr. Carlos Saúl Menem y los Señores Gobernadores abajo firmantes con el objeto de comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país y sus regiones, en un todo de acuerdo con el Programa "Argentina en Crecimiento 1993-1995" y con los Programas de Transformación que tienen encaminados las Provincias Argentinas, y declaran:

PRIMERO

Los Señores Gobernadores han acordado la adopción de políticas uníformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos Provinciales una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciales en lo que es materia de su competencia según las Constituciones locales, en los siguientes actos de gobierno:

- 1) Derogar en sus jurisdicciones el IMPUESTO DE SELLOS.

La derogación deberá incluir de inmediato la eliminación del Impuesto de Sellos a toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada destinada a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción e ir abarcando gradualmente al resto de las operaciones y sectores de la forma que determine cada provincia, y

deberá completarse antes del 30 de junio de 1995.

La presente derogación no alcanza a las tasas retributivas de servicios administrativos efectivamente prestados y que guarden relación con el costo del servicio. Tampoco alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21º del Título III, Capítulo IV de la Ley 23.966, ni a instrumentos que no inciden ni directa ni indirectamente en el costo de los procesos productivos.

- 2) Derogar de inmediato los Impuestos Provinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas, Energía Eléctrica, incluso los que recaen sobre la auto generada; y Servicios Sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico. Asimismo se derogarán de inmediato las que graven directa o indirectamente, a través de controles, la circulación interjurisdiccional de bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo.

Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes. Igual actitud se seguirá respecto de las Tasas Municipales en general, en los casos que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación.

- 3) Derogar de inmediato los Impuestos que graven los Intereses de Depósitos a Plazo Fijo y en Caja de Ahorro, a los Débitos Bancarios, y gradualmente todos aquellos que graven la nómina Salarial, completando la derogación antes del 30 de junio de 1995.

- 4) Modificar el IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, disponiendo la exención de las actividades que se indican a continuación:

- a) Producción primaria.
- b) Prestaciones financieras realizadas por las entidades comprendidas en el régimen de la Ley nº 21.526.
- c) Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, las Administradoras de Fondos Comunes de Inversión y de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías de Seguros, exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica.
- d) Compraventa de divisas, exclusivamente por los ingresos originados en esta actividad.
- e) Producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista.
- f) Prestaciones de servicios de electricidad, agua y gas, excepto para las que se efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o veraneo.
- g) Construcción de inmuebles.

Estas exenciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo a lo que disponga cada Provincia, pero deberán estar completadas antes del 30 de junio de 1995.

La exención no alcanzará a todas las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo

21º del Título III, Capítulo IV, de la Ley nº 23.966.

Para compensar la posible falta de ingresos, las Provincias eliminarán exenciones, desgravaciones y deducciones existentes a actividades no incluidas en el listado anterior y adecuarán las alícuotas aplicables a todas las actividades no exentas.

- 5) Modificar, a partir del 1º de enero de 1994, los Impuestos sobre la Propiedad Inmobiliaria a fin de que:

- a) Las tasas medias que resulten aplicables, en ningún caso: superen el UNO CON VEINTE CENTESIMOS POR CIENTO (1,20%) para los inmuebles rurales, el UNO CON TREINTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (1,35%) para los suburbanos y/o suburbanos y el UNO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (1,50%) para los urbanos, y

- b) La base imponible no supere el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor de mercado de los inmuebles urbanos y suburbanos y/o suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras en el caso de los inmuebles rurales.

Recomendar a los Municipios la modificación de las Tasas Viales y de Mantenimiento de Caminos o de otras similares a fin de que no superen el CUARENTA CENTIMOS POR CIENTO (0,40%) del OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor de mercado de los inmuebles suburbanos o del valor de la tierra libre de mejoras y se ajusten en todo caso al costo que derive de la prestación efectiva del servicio retribuido.

- 6) Intensificar al máximo las tareas de fiscalización y control que deben desarrollar sus respectivos Organismos Recaudadores; implementar, coordinadamente, sistemas uniformes en todas las jurisdicciones que, como los regímenes de retención o percepción en la fuente o de pago a cuenta o de anticipo, aseguren un determinado nivel de recaudación y prevea metodología que permita la discriminación obligatoria del actual impuesto sobre los Ingresos Brutos en las facturas o documentos equivalentes, en las ventas entre inscriptos. Las provincias coordinarán su acción con relación a los sistemas multilaterales de administración y solución de conflictos que aseguren la recaudación y control en el caso de contribuyentes que realicen actividades en más de una jurisdicción.

- 7) Asumir la obligación de que en un plazo no mayor de tres años, a partir de la firma del presente convenio y una vez superado el período de transición y logrado un mayor control de la evasión, la imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos, limitada en los términos del punto 4) anterior, sea sustituida por un impuesto general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía.

- 8) Asumir, a partir del 1º trimestre de 1994, la obligación de que las valuaciones y alícuotas a aplicar, con relación a los impuestos sobre las Patentes, de Automotores y/o similares a nivel Provincial guarden uniformidad entre todas las jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia la que publica la Dirección General Impositiva, a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporados al Proceso Económico.

En el caso de las Provincias en que el impuesto

- sobre las patentes de automotores y/o similares, esté, total o parcialmente, a cargo de los municipios se propondrá a los mismos la adecuación al régimen precedente.
- 9) Propender a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuya gestión actual se encuentre a cargo de las provincias o a la liquidación de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente a las Provincias.
 - 10) Dejar sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios y las intervenciones en diversos mercados, en particular:
 - adhiriendo al Decreto 2284/91 en lo que resulte de aplicación provincial;
 - derogando el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales en todos los sectores;
 - liberando al sector comercial (libre instalación de farmacias, derogación del monopolio de mercados mayoristas, horarios comerciales, etc.);
 - eliminando todas las restricciones cuantitativas o de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarias;
 - disponiendo la apertura de los mercados del transporte de pasajeros y carga de acuerdo a las orientaciones adoptadas en el nivel federal;
 - propiciando las medidas tendientes a disminuir los costos judiciales y del ejercicio profesional. En particular, la determinación de honorarios de abogados y peritos, se hará guardando relación con el número de horas trabajadas y no por el monto de la demanda o sequencia.
 - Adhiriendo a la política federal en materia minera de acuerdo a lo establecido en el decreto 815/92.
 - adhiriendo, en las jurisdicciones provinciales que corresponda, a la política federal en materia portuaria de acuerdo a lo establecido en el decreto 817/92.
 - adhiriendo a la política federal en materia de medicamentos establecida en el decreto 150/92 y sus modificatorios.
 - reconociendo los controles y registros federales y de las demás Provincias en materia de medicamentos y alimentos.
 - 11) Adoptar las modalidades, procedimientos y acciones establecidos por los artículos 1 a 7, 8 a 13, 15 a 19, 21 a 40, 60, 61, 62 y 63 de la Ley nº 23.696 y por los artículos 1 y 2, 23, 36, 42 a 47, 60 y 61 de la Ley nº 23.697, los que adecuados al ordenamiento provincial, serán de aplicación directa en las Provincias. Idéntico procedimiento se adoptará, en lo que resulte de aplicación provincial, con los decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 958/92, 1492/92, 1494/92, 1813/92 y 2293/92.
 - 12) Las Provincias que suscriben este Acuerdo se adhieren, a los fines de determinar la competencia, en materia de accidentes de trabajo, al criterio establecido en el artículo 16 de la Ley nº 24.028.

SEGUNDO

El Estado Nacional, correspondiendo al aporte que significa para el proceso de crecimiento de la economía nacional y regionales, lo acordado pre-

cedentemente por los Señores Gobernadores, conviene en la realización de los siguientes actos de gobierno:

- 1) Reformular los tributos que percibe la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y plazo en que se comprometen las Provincias.
- 2) En el caso de los Impuestos sobre las Patentes de Automotores y/o similares, unificar las valuaciones y alícuotas a aplicar con las de las restantes jurisdicciones. Para las valuaciones se tomará como referencia las que publica la Dirección General Impositiva a los fines del Impuesto sobre los Bienes Personales No Incorporado al Proceso Económico.
- 3) Eliminar el Impuesto a los Activos afectados a los procesos productivos, en aquellos sectores alcanzados por las derogaciones y exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto de Sellos.
- 4) Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Esta disminución se hará acompañando las prioridades sectoriales reflejadas en las decisiones sobre operaciones y sectores alcanzados por las exenciones dispuestas por cada provincia en relación al Impuesto a los Ingresos Brutos.
- 5) Adecuar de inmediato las normas sobre retenciones y pagos a cuenta del IVA para que en ningún caso los contribuyentes paguen una tasa efectiva superior al 18%.
- 6) Organizar y poner en marcha el Sistema de Cédulas Hipotecarias Rurales y de Bonos Negociables respaldados por hipotecas urbanas, dando participación en el operativo a los Bancos de Provincia, para viabilizar el financiamiento a mediano y largo plazo para el sector agropecuario y de la construcción.
- 7) Aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales —con exclusión de las de Profesionales que prevee el artículo 56 de la Ley nº 18038 (t. o. 1980)— en el caso de las Provincias que adhieran al nuevo Régimen Previsional que sancione la Nación, respetando los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales. Para el caso que con posterioridad a la fecha del presente alguna Provincia modificara su legislación en materia de jubilaciones y pensiones, el mayor costo que pudiera resultar de dichas modificaciones estará a cargo exclusivo de dicha Provincia. Esta transferencia se instrumentará a través de convenios particulares con cada jurisdicción provincial interesada, los que deberán suscribirse en un plazo de 90 días a partir de la sanción de la Ley Provincial respectiva.
- 8) Asegurar, a través de los respectivos organismos sectoriales responsables y los Entes Reguladores de servicios públicos privatizados, que las medidas impositivas a adoptarse en los niveles de gobierno nacional, provincial o municipal que puedan implicar directa o indirectamente, reducciones de costos o aumento de los beneficios en las empresas prestadoras de servicios públicos y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores.
- 9) Para financiar la eventual pérdida de recaudación provincial originada en la eliminación de impuestos y exenciones dispuestas en el presente Acuerdo, el Gobierno Nacional suspenderá la re-

tención de los montos excedentes de Coparticipación Federal por arriba del mínimo de \$ 725 millones establecidos como garantía del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscriptos el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley n° 24.130. Esta suspensión regirá transitoriamente en forma automática por sesenta (60) días y en forma permanente a partir del momento en que cada Provincia cumplimenté los compromisos de aplicación inmediata asumidos en el presente Acuerdo. La garantía de \$ 725 millones se elevará a \$ 740 millones a partir del 1° de enero de 1994.

Cuando la recaudación impositiva definida en iguales términos al párrafo anterior exceda un nivel para las provincias de \$ 800 millones mensuales, las Provincias asumen el compromiso de utilizar estos excedentes para cancelar deudas consolidadas contraídas previamente al Acuerdo del 12 de agosto de 1992 o para financiar erogaciones de capital y programas de reformas de los Estados Provinciales que sean aprobados por el Gobierno Nacional.

TERCERO

Las Provincias firmantes y el Estado Nacional incluyen en el presente Acuerdo la prórroga hasta el día 30 de junio de 1995 de la vigencia del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" suscripto el día 12 de agosto de 1992, ratificado por ley n° 24130, incluyendo las modificaciones introducidas por el punto 8) del artículo Segundo del presente.

Se incorpora a la Cláusula Primera, inciso b) del Acuerdo arriba mencionados a las Provincias de Corrientes con \$ 1.500.000 (Pesos un millón quinientos mil) y del Chaco con \$ 500.000 (Pesos quinientos mil), para cubrir desequilibrios fiscales.

CUARTO

Las Provincias y el Estado Nacional procederán a elevar a las legislaturas dentro de los diez días de suscripto el presente, los proyectos de ley en virtud de los cuales se apruebe este Pacto con la autorización a los respectivos Poderes Ejecutivos a dictar las normas para cumplir con lo convenido en el presente Acuerdo.

El presente Acuerdo producirá efectos solo en favor de las provincias que lo firmen y desde el momento del acto de firma.

Este PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO, queda abierto a la adhesión por parte de los Señores Gobernadores de las Provincias que no lo suscriben en el día de la fecha.

Refrendan el presente los Señores Ministros del Interior, Dr. Gustavo Béliz y de Economía y Obras y Servicios Públicos, Dr. Domingo Felipe Cavallo y el Señor Secretario General de la Presidencia, Dr. Eduardo Bauzá.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. EXPEDIENTE n° 5513/93.

SANTA ROSA, 29 de Setiembre de 1993

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Provincia. Dése a

Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.

DECRETO N° 1959.-

Dr. Ruben Hugo Marín, Gobernador de La Pampa.- Cr. Osvaldo Luis Dadone, Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas.

Secretaría General de la Gobernación: 29 de setiembre de 1993.-

Registrada la presente Ley, bajo el número Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve (1.499).-

Cándido Hipólito Díaz, Secretario General de la Gobernación.

DECRETO N° 1967.-

Santa Rosa, 30 de Septiembre de 1993

VISTO:

La Ley n° 1.499 por la que se ratifica el PACTO FEDERAL para EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Primera, inciso primero, de dicho Pacto, debe implementarse de inmediato la eliminación del Impuesto de Sellos que afecte a la operatoria financiera y de seguros institucionalizada, relacionada con los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción;

Que el artículo segundo de la mencionada Ley, autoriza a este Poder Ejecutivo para dictar las normas necesarias a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del acuerdo.

Que en concordancia con los principios generales del Derecho Tributario, deben establecerse con precisión los alcances de las medidas eximentes del tributo;

Que asimismo, en virtud de las disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional respecto de las Cédulas Hipotecarias Rurales, a través del Decreto n° 1848/93, y en mérito a las facultades generales conferidas por la citada Ley Provincial, se considera oportuno incorporar tales prerrogativas en la Legislación Impositiva vigente;

Que en tal orden de ideas debe designarse además al Organismo que ha de dictar las normas operativas y de contralor indispensables para el fiel cumplimiento de los objetivos propuestos;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:

Artículo 1°.— Decláranse exentas del Impuesto de Sellos las operaciones financieras activas y sus accesorias, efectuadas por Entidades comprendidas en el régimen de la Ley n° 21.526 y sus modificatorias, en el marco de las líneas crediticias aprobadas por las mismas que estén destinadas, en forma exclusiva y específica, al financiamiento de actividades productivas de los sectores agropecuario, industrial, minero o de la construcción.

Esta exención se extiende a las refinanciaciones, adelantos en cuenta corriente, descubiertos.

certificación de su
autoridad competente.

no, los servicios de
o en cada caso, en
y estudios técnicos

procederá al libramiento
alimentarios alcan-
creto. En el caso de
previo al despacho
y 8º del presente
a la libramiento
autorización de los

la autorización o
interior, el servicio
los productos sin
el importador. A tal
sanción en el des-
tuye no depositario
o, y que se compro-
contaminación hasta
tente se expida al
gar de su depósito.

previo al despacho
presente decreto, el
nuestra representa-
oceder a la entrega
o. El tamaño de la
écnicos de general
ional.

no presentarse la
en el plazo fijado por
razones imputables
erá de acuerdo con
iguientes de la ley

exportación previs-
no, estarán a cargo
ad sanitaria compe-
tor los que
uicio de respon-
enal y demás san-
or.

Acción Social y los
ales competentes.
estarán a cargo del
s previsto en el Có-
pción de aquéllos
cidos en el país, en
del SENASA, los
no. El Ministerio de
leberán establecer
la publicación del
ctos considerados
stro.

Art. 16. — Los importadores de los productos com-
prendidos en el art. 5º, deberán cumplimentar al mo-
mento del registro, los requisitos establecidos en el art.
4º del anexo II del dec. 2126/71, texto según art. 2º dec.
2092/91.

Art. 17. — Para cumplimentar con la indicación de
estabilidad y autorización para el despacho estableci-
das en el art. 6º del presente decreto, los servicios en-
cargados del registro de productos alimentarios entre-
garán a solicitud de los importadores un certificado
complementario, en el caso de productos registrados
con anterioridad a la fecha de vigencia del presente
decreto.

Art. 18. — A los fines de los párrafos segundo y
tercero del art. 2º del anexo I del dec. 2126/71 texto
según art. 1º del dec. 2092/91, se considerarán satisfe-
chas las exigencias del Código Alimentario Argentino,
en el caso de importaciones de productos alimentarios
acondicionados para su venta directa al público, prove-
nientes de los siguientes países:

— Países de la Comunidad Económica Europea

— Estados Unidos de América

— Nueva Zelanda

— Reino de Suecia

— Confederación Suiza

— Japón

— Australia

— Noruega

— Canadá

— Estado de Israel

— Austria

— Países con los que rijan tratados de integración
económica o acuerdos de reciprocidad en materia
higiénico-sanitarias.

En todos estos casos, los productos alimentarios
deberán haber sido elaborados bajo los controles apli-
cables a los alimentos destinados al consumo humano
en el mercado interno del país de origen. Las autori-
dades sanitarias competentes podrán modificar el listado
anterior de países, siguiendo el mecanismo establecido
en el art. 20 del presente decreto.

Art. 19. — El Ministerio de Salud y Acción Social
establecerá los aranceles o tasas a cobrar por los
servicios de registro de los productos alimentarios. Los
importes que se lijén serán uniformes en todo el país,
conforme con el criterio de organización del art. 7º de la
ley 18.284 y su aplicación se efectivizará a través de la

autoridad sanitaria que resulte competente en cada
jurisdicción.

Art. 20. — Los servicios estatales de control de
alimentos y demás productos de origen animal y vege-
tal actuarán coordinadamente con el fin de evitar la
superposición de tareas y la imposición de trámites
innecesarios que dificulten el intercambio comercial. A
tal fin, el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENA-
SA), el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
(IASCAV), el Ministerio de Salud y Acción Social y la
Administración Nacional de Aduanas (ANA), realizarán
reuniones de coordinación a nivel de sus máximas
autoridades por lo menos cada tres (3) meses y consi-
derarán las propuestas de facilitación de sus interven-
ciones originadas tanto en el sector estatal como en el
privado.

Art. 21. — Déjase sin efecto todo trámite de consulta,
información, intervención y autorización previa de
carácter cuantitativa para la importación de productos
alimentarios realizada hasta la fecha por los organis-
mos mencionados en el presente decreto.

Art. 22. — Deróganse las disposiciones que se
opongan al presente decreto y autorízase al Ministerio
de Salud y Acción Social, SENASA, IASCAV y Adminis-
tración Nacional de Aduanas, a adecuar las reglamen-
taciones vigentes en concordancia con lo establecido
en el presente decreto.

Art. 23. — El presente decreto comenzará a regir a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.

Art. 24. — Comuníquese, etc. — Menem. — Cavallo.
— Aráoz.

DECRETO 1813

Honorarios de peritos, marilleros y demás auxi-
liares de la Justicia — Creación de un registro en
jurisdicción del Poder Judicial de la Nación.

Fecha: 29 setiembre 1992.

Publicación: B. O. 2/10/92.

Citas legales: ley 23.898; L-D, 3751.

Art. 1º — En aquellas situaciones en las que a la fe-
cha del presente no exista regulación firme de honora-
rios y respecto de las cuales la aplicación estricta de las
pautas establecidas en las leyes arancelarias que rigen
la actividad de los peritos auxiliares de la justicia desig-
nados en juicio, resulte desproporcionada en función
de la tarea profesional cumplida, su utilidad, el tiempo
que haya insumido y la naturaleza o materia del asunto
de que se trate, los magistrados podrán excepcionar de
aquellas pautas y regular los honorarios conforme a
estos últimos criterios, por aplicación de lo previsto en
el segundo párrafo del art. 1071 del Código Civil.

Art. 2º — Créase en jurisdicción del Poder Judicial de la Nación un registro de peritos, martilleros y demás auxiliares de la justicia para designaciones de oficio, con el objeto de la producción de las pruebas a petición de parte y demás tareas vinculadas al ejercicio de la función jurisdiccional. El cuerpo se regirá por las normas del presente decreto y por la reglamentación que al efecto dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 3º — Las personas que deseen integrar tal registro, deberán anotarse en las listas que se confeccionarán a ese efecto, en la forma, condiciones y con los requisitos que establezca la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 4º — A los fines de permitir a las partes el ejercicio de la opción por el régimen de producción de la prueba pericial o de las demás tareas auxiliares de la justicia aquí establecido y hasta tanto se perfeccionen los listados del nuevo registro, durante el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del presente, se podrá solicitar a los magistrados intervinientes la selección de profesionales de entre las listas actualmente existentes en jurisdicción de los tribunales respectivos. La designación quedará sujeta a la condición suspensiva de que, al tiempo de la aceptación del cargo conferido, el perito exprese su aceptación del sistema previsto en el presente.

Art. 5º — Los integrantes del nuevo registro y quienes acepten realizar su labor bajo el sistema del presente, en los términos del artículo anterior, no percibirán honorarios por su actuación conforme a sus respectivas leyes arancelarias sino que su desempeño será remunerado en la forma y condiciones que se establecerán en los artículos siguientes y en la reglamentación que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La anotación en las listas mencionadas en el art. 2º o la aceptación de los cargos, en los casos en que las partes hubieran solicitado la realización de las pruebas periciales, la actividad de los martilleros o de los demás auxiliares de la justicia bajo este régimen, importará el consentimiento del régimen retributivo y demás condiciones establecidas en el presente decreto y en su reglamentación.

Art. 6º — La Corte Suprema de Justicia de la Nación reglará lo concerniente a la organización y funcionamiento del nuevo régimen alternativo del vigente en la actualidad para la realización de la prueba pericial, la actividad de los martilleros y la de los demás auxiliares de la justicia, y fijará el sistema retributivo para cada una de las especialidades y tareas que correspondan.

Art. 7º — La opción entre el sistema de producción de la prueba pericial creado por este decreto y el vigente a la fecha del presente, podrá ser libremente formulada por cualquiera de las partes:

a) En oportunidad de ofrecer la prueba pertinente o en la que deba expedirse sobre la pedida por la contraria.

b) Hasta dentro de los cinco (5) días posteriores a la designación judicial de los peritos auxiliares de la justicia, en forma previa a la notificación de los designados.

La elección que en favor del presente régimen practique cualquiera de las partes tornará obligatorio para todas las demás tal modo de realización de dichas actividades auxiliares.

Art. 8º — Con el objeto de facilitar la tarea del Poder Judicial de la Nación y al solo efecto de referencia informativa, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos elaborará tablas indicativas de las remuneraciones horarias, diarias y mensuales que percibe todo tipo de profesional en el ámbito de la actividad privada.

Art. 9º — Como condición de la elección del régimen instrumentado por este decreto, cada parte que solicite deberá pagar el tres por ciento (3 %) del monto reclamado en la demanda, por cada perito o auxiliar que se requiera, en la forma y oportunidad que se determine en el artículo siguiente. Dicho valor integrará las costas del proceso.

Cuando el equivalente al tres por ciento (3 %) sea de menos de trescientos pesos (\$ 300) se deberá pagar este monto por cada perito o auxiliar que se solicite. En caso que el perito o auxiliar sea designado de oficio por el juez, la o las partes manifestarán el uso de la opción en cuyo caso el equivalente al tres por ciento (3 %) será pagado por mitades sin perjuicio de lo que se disponga posteriormente respecto de las costas del juicio.

En el supuesto de tratarse de procesos con monto indeterminado, o sin contenido económico, la parte deberá pagar la suma de quinientos pesos (\$ 500) por cada auxiliar, excepto en aquellos casos en que, por resolución fundada en la elevada complejidad de las operaciones a realizarse el juez de la causa fijare un monto mayor. A los demás efectos serán de aplicación los arts. 5º y 6º de la ley 23.898.

Para el supuesto de los martilleros el tres por ciento (3 %) se calculará sobre el valor del monto de la base de la subasta, salvo cuando no hubiere base o la venta se hiciere por un monto menor al de la base, en cuyo caso el porcentaje se calculará sobre el precio de venta.

Art. 10. — El pago de la tasa a que se hace mención en el artículo anterior se elevará:

a) Respecto de los nombramientos de peritos, al requerimiento de parte o de oficio, en dos (2) cuotas:

1. La primera de ellas, correspondiente al cinco por ciento (50 %) de la tasa total, deberá ser depositada por el litigante que opere por el régimen del presente decreto, hasta el quinto (5º) día de haber quedado firme el auto de designación del experto de que se trate y con anterioridad a su aceptación del cargo.

2. La segunda cuota, consistente en el restante cincuenta por ciento (50 %) de la tasa total, deberá abonarse al tiempo del cumplimiento de la sentencia definitiva, en igual proporción a la condena en costas. La integración de esta segunda cuota será requisito previo a cualquier relio de fondos o documentación del expediente, a todo levantamiento de medidas cautelares que se dispusiera con posterioridad a la sentencia definitiva, así como al archivo del expediente. También será recaudo previo a la homologación de todo acuerdo transaccional por los magistrados intervinientes.

b) En el caso de los martilleros se descontará del resultado de la subasta, siendo el martillero designado el responsable de efectuar el depósito correspondiente, dentro de los dos (2) días de realizada la misma.

La falta de depósito de la tasa fijada, en los plazos fijados en los puntos 1 y 2 precedentes importará el tácito desistimiento de la opción por el sistema de la actividad auxiliar reglado por el presente decreto.

La falta de depósito por el marillero de la tasa fijada en el punto b) del presente artículo generará su responsabilidad personal y patrimonial, como administrador de bienes ajenos.

Art. 11. — En los procesos en que una de las partes obtuviera el beneficio de litigar sin gastos, para hacer uso del servicio que se instrumenta por este decreto, la contraparte deberá abonar hasta una suma de mil pesos (\$ 1.000) por cada uno de los auxiliares como primera cuota, en el caso que el monto equivalente al cincuenta por ciento (50 %), del tres por ciento (3 %) supere dicha suma.

En aquellos casos en que, por el monto resultante de la sentencia definitiva del proceso y la aplicación de la tasa porcentual establecida en este decreto, resulte necesario integrar una suma mayor, por diferencia o por resolución fundada del juez, ésta se estimará y abonará al momento de liquidarse las costas del proceso, siendo únicamente exigible al condenado en costas.

Para los procesos laborales y de la seguridad social se establece como tope de la primera cuota del pago de la tasa, quinientos pesos (\$ 500) por cada auxiliar, siendo de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.

Los lopes previstos en este capítulo podrán ser elevados en cada caso por resolución fundada del juez de la causa basado únicamente en la complejidad de la pericia a realizar.

Art. 12. — Los fondos que resulten de la percepción de la tasa creada en el presente decreto se destinarán al pago de las remuneraciones de los profesionales integrantes del registro creado y en la medida de sus actuaciones, y su remanente será distribuido entre magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial de la Nación, con carácter de complemento adicional no remunerativo ni bonificable, en la proporción y conforme a lo que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 13. — La Dirección General Impositiva, dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la publicación del presente, deberá incrementar, en cuanto resulte necesario, el personal destinado a la determinación y percepción de la tasa de justicia, a los fines de atender también a la recaudación de la tasa fijada en este decreto.

Art. 14. — Invítase a las provincias a adherir al sistema alternativo de producción de pruebas periciales creado por este decreto, mediante la adopción de medidas similares en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 15. — Comuníquese, etc. — Menem. — Cavallo.
— Malorano.

DECRETO 1815

Presupuesto — Aplicación de los clasificadores presupuestarios, a los integrantes del sector público nacional financiero y no financiero —
Modificación del dec. 866/92.

Fecha: 29 setiembre 1992.
Publicación: B. O. 6/10/92.

DECRETO 1819

Empleados públicos — Personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales (Dec. 1455/87) — Remuneraciones a partir del 1/10/92.

Fecha: 29 seliembre 1992.
Publicación: B. O. 27/10/92.

DECRETO 1828

Convocatoria al H. Congreso a sesiones extraordinarias.

Fecha: 7 octubre 1992.
Publicación: B. O. 14/10/92.

Art. 1º — Convócase al H. Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias a partir del 13 de octubre de 1992.

Art. 2º — Declárase asuntos comprendidos en la convocatoria los detallados en el anexo que forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3º — Comuníquese, etc. — Menem. — Salo-
nia.

en el horario de trabajo, los que podrán coincidir con las escalas técnicas que realice la unidad.

16. Tiempo de trayecto

El tiempo de trayecto entre la cabecera y la terminal deberá estar condicionado por:

- a) Cumplimiento estricto de las normas de tránsito.
- b) Cumplimiento estricto de las normas de seguridad.
- c) Densidad del público usuario.
- d) Longitud real del recorrido.

Asimismo, deberá ser lo suficientemente flexible como para atender, sin desmedro del cumplimiento normativo, los hechos fortuitos que pudieran suceder, tales como:

- a) Variaciones climáticas.
- b) Reparaciones en la vía pública.
- c) Eventualidades que pudieran surgir con respecto al público usuario.
- d) Otros.

No podrán instituirse premios o castigos relacionados con el cumplimiento horario del recorrido.

Los conductores de corta y media distancia no podrán realizar tareas de expendio y cobro de boletos.

17. Personal temporario

Toda vez que se produzca un aumento de trabajo, o la cantidad de personal de conducción permanente se halle disminuido por el uso de licencia de cualquier naturaleza, las empresas podrán contratar personal temporario en las condiciones fijadas por la normativa vigente.

Asimismo, las empresas podrán contratar "franqueros", a fin de respetar las pausas y descansos fijados por el presente decreto y la normativa general.

DECRETO 2293

Profesionales universitarios y no universitarios que posean títulos con validez nacional — Habilitación para el ejercicio de la profesión — Inscripción.

Fecha: 2 diciembre 1992.

Publicación: B. O. 7/12/92.

Art. 1º — Todo profesional universitario o no universitario que posea un título con validez nacional, podrá ejercer su actividad y oficio en todo el territorio de la República Argentina, con una única inscripción en el

colegio, asociación o registro que corresponda al de su domicilio real.

Los profesionales que ya se encontraren inscriptos o matriculados en más de una jurisdicción deberán mantener al menos la que corresponda a su domicilio real.

Los profesionales que ya se encontraren inscriptos únicamente en jurisdicciones distintas a la de su domicilio real, no estarán obligados a inscribirse en esta última. En ninguna provincia o municipio se podrá obligar a un profesional a realizar una inscripción para el ejercicio de su profesión, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo.

El presente artículo será exclusivamente aplicable a aquellas profesiones para las que fuera obligatoria dicha matriculación.

Art. 2º — Todos los profesionales estarán sujetos al cumplimiento de las normas que reglamentan el ejercicio de la profesión en las diferentes jurisdicciones donde actúen, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1º. En caso de ser sancionados en una jurisdicción diferente de aquella donde se hallaren inscriptos o matriculados, la sanción deberá ser comunicada a la autoridad que corresponda en su jurisdicción de origen.

Art. 3º — Todo acto emanado de un profesional, matriculado según las prescripciones del art. 1º tendrá validez y eficacia en todo el territorio de la República con la sola intervención, cuando fuera legalmente exigida, del colegio o asociación al que pertenece, aun cuando involucre a personas o cosas de otra jurisdicción. Esta disposición será de aplicación en las oficinas públicas a partir de los diez (10) días de la publicación del presente decreto.

Lo establecido en el presente artículo será de aplicación inclusiva, respecto de los actos que emanen de contadores, escribanos, ingenieros, arquitectos, agrimensores y la que resulte de todo otro que hasta el momento hubiese tenido algún tipo de limitación, o cuanto a su validez.

Art. 4º — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, cuando correspondiere la registración de escrituras y demás documentos notariales otorgados por escribanos en su ámbito jurisdiccional, en oficinas públicas de jurisdicción diferente a la de su otorgamiento, se podrán realizar los trámites del caso con el solo recaudo de su autenticación o legalización en la jurisdicción de origen y sin necesidad de intervención alguna en aquella extraña jurisdicción.

Art. 5º — El presente decreto tendrá vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 6º — Comuníquese, etc. Menem. — Cavallo.

MINIS

RESOLUCION CO
148 (M.S. y A.S.)

Especialidades
(de la res. con). 4
(M. S. y A. S.). y
Texto ordenado

Fecha: 13 agosto
Publicación: B. O.

Legales: R. cor
(M.S. y A.S.); LII-B
(M.S. y A.S.); LII-D.

Modificase
y Obras y Serv
Salud y Acción
1992, conforme a
artículos siguiente

Incorpórase
con: el siguiente

En caso de
qualquien, la Se
Ministro de Salud
prorroga por
pedirse, que n
asenta (60) días
pueda resolver

Modificas
nuevo texto

Art. 3º — La
el art. 4º del dec
mentos autorizad
figuran el anexo

AÑO 19

94

Folio

184

REPUBLICA ARGENTINA

Nº

443/94



SENADO DE LA NACION

PODER EJECUTIVO

Mensaje Nº (1976/94) y proyecto de ley CREANDO EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION UN REGISTRO DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, UN REGISTRO PUBLICO DE DEUDORES MOROSOS Y UN REGISTRO PUBLICO DE INCAPACIDAD LABORAL.

Legislación, Gual
INTERIOR y JUST.
TRAMITADO

COMISION: _____

ENTRADA: _____

DICTAMEN: _____

O/D: _____

CADUCA: 30/4/_____

RESOLUCION SENADO			RESOLUCION DIPUTADOS		
APROBADO	MODIFICADO	RECHAZADO	APROBADO	MODIFICADO	RECHAZADO

SENADO		DIPUTADOS		SENADO		SANCION DEFINIT.	LEY
ACEPTO	RECHAZO	INSISTIO	NO INSIS.	INSISTIO	NO INSIS.		

PODER EJECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
PROMULGACION	VETO	OBSERVACION	SENADO	DIPUTADOS	SANCION

*El Poder Ejecutivo
Nacional*

1976

SENADO DE LA NACION
MESA DE ENTRADAS
9 NOV 1934
SEC. 10 N° 443 94
HORA 20



BUENOS AIRES, - 8 NOV. 1994

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el fin de someter a su consideración un proyecto de ley por el que se crean, en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, un REGISTRO DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, un REGISTRO PÚBLICO DE DEUDORES MOROSOS y un REGISTRO PUBLICO DE INCAPACIDAD LABORAL.

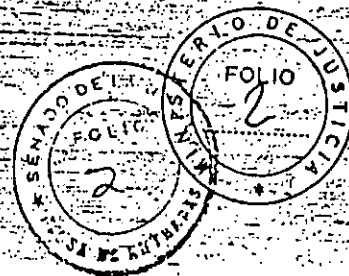
Con el objetivo de reducir costos judiciales y con el propósito de perfeccionar el método de designación de los auxiliares de la justicia, se modifica el sistema tradicional de nombramientos y se reforma la modalidad regulatoria de los honorarios, apartándose de las disposiciones arancelarias.

Los otros dos Registros Públicos que se crean, tienen una finalidad informativa y, dado su carácter público, todo interesado podrá acceder a la información que en ellos se asiente.

Dadas las características y el alcance de las sentencias dictadas en juicios ejecutivos, se ha establecido el recaudo de anotar también en el REGISTRO PUBLICO DE DEUDORES MOROSOS, la iniciación de los juicios ordinarios de repetición que promovieren los condenados en juicios

M. J.
365

El Poder Ejecutivo
Nacional



ejecutivos.

La información que se asiente en el REGISTRO PUBLICO DE INCAPACIDAD LABORAL, permitirá al empleador conocer anticipadamente la capacidad laboral del trabajador evitando así la contratación de personal inadvertidamente incapacitado. También se impedirán los dobles juzgamientos por la misma incapacidad o por las recidivas de las mismas enfermedades.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

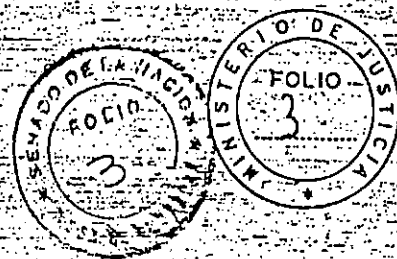
WENSAJE N° 1976

Dr. RODOLFO CARLOS BARRA
MINISTRO DE JUSTICIA

M. J.

365

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ...
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

CAPITULO I

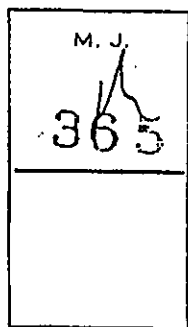
REGISTRO DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA

ARTICULO 1º.- A efectos de producir la prueba pericial, o cuando resultare necesaria la actuación de un auxiliar de la Justicia, será de aplicación lo dispuesto en la presente ley.

ARTICULO 2º.- Quienes aspiren a desempeñarse como peritos, martilleros u otros auxiliares de la Justicia, deberán inscribirse en el término de TREINTA (30) días de vigencia de la presente en el REGISTRO DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA que abrirá y llevará en forma actualizada el MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, que efectuará una publicidad adecuada a la convocatoria que realice.

ARTICULO 3º.- En el Registro se inscribirán como mínimo, aspirantes para las siguientes profesiones y disciplinas, sin perjuicio de la inclusión de aquellas otras que solicite la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION:

- 1) Abogados.
- 2) Agrimensores.
- 3) Arquitectos.
- 4) Asistentes Sociales.
- 5) Calígrafos Públicos
- 6) Contadores Públicos y demás profesionales en Ciencias Económicas.
- 7) Doctores en Química.



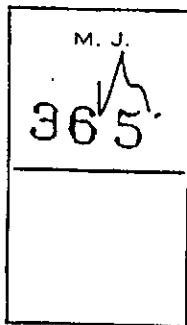
- 8) Escribanos Públicos.
- 9) Ingenieros en las distintas especialidades.
- 10) Martilleros
- 11) Médicos legistas y psiquiatras.
- 12) Médicos de otras especialidades.
- 13) Médicos veterinarios.
- 14) Odontólogos.
- 15) Peritos en Criminalística.
- 16) Peritos Scopométricos.
- 17) Psicólogos.
- 18) Taquígrafos.
- 19) Traductores Públicos.

ARTICULO 4°.- El MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION, determinará la cantidad de auxiliares que integrarán el Registro conforme a las necesidades del servicio de justicia.

ARTICULO 5°.- Los aspirantes deberán contar con una antigüedad mínima de CINCO (5) años en la matrícula o, de no existir ésta, en el ejercicio de la actividad. El Decreto 2293/92 será de aplicación en lo relativo a la matriculación del auxiliar. EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION seleccionará a los aspirantes conforme al sistema que disponga la reglamentación de la presente.

ARTICULO 6°.- Los auxiliares inscriptos en el Registro podrán asociarse si ello facilitare su actuación, sin perjuicio de la responsabilidad individual del designado.

ARTICULO 7°.- La inscripción en el Registro importa la aceptación por el auxiliar de las previsiones establecidas en la presente ley y crea incompatibilidad para desarrollar tareas como consultor técnico, o toda otra que tenga vinculación con el



proceso en el que fuera designado.

La reglamentación de la presente fijará los términos en los que se remunerará la actividad de los auxiliares, por todo concepto y con exclusión de cualquier disposición arancelaria.

ARTICULO 8º.- El Juez de la causa procederá a designar al auxiliar previa desinsaculación, de entre los inscriptos en el Registro para la especialidad que corresponda.

El auxiliar sólo podrá ser designado nuevamente luego que resulte sorteado el resto de los de su especialidad y hasta un máximo de SEIS (6) designaciones mensuales.

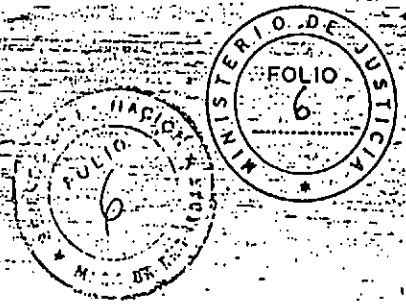
Cada designación de un auxiliar será comunicada por el magistrado a la Mesa General de Entradas común a las CAMARAS NACIONALES DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL, EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, EN LO CIVIL, EN LO COMERCIAL, DEL TRABAJO, y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la que llevará el control de la cantidad de designaciones que se efectúe a cada auxiliar.

ARTICULO 9º.- Si el auxiliar rechazare la designación o fuere removido del cargo, quedará excluido del Registro, salvo que invocase causa que resulte justificada, o se encontrase incurso en alguna de las de excusación previstas en el artículo 17 del CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL de la NACION.

El auxiliar también podrá solicitar su exclusión voluntaria del Registro o su suspensión, la que se concederá si responde a razones atendibles.

ARTICULO 10.- Dentro de los CINCO (5) días de quedar firme la designación de un auxiliar o perito, la parte que lo solicitó deberá abonar una tasa por cada designación de auxiliar, cuyo monto y procedimiento de pago será establecido por la

M. J.
365



reglamentación.

Si distintas partes solicitasen la designación de un auxiliar de la misma especialidad para responder a distintos puntos, cada una deberá abonar el total de una tasa.

La contraparte de quien actuare con beneficio de litigar sin gastos deberá abonar la tasa prevista.

No podrá notificarse al auxiliar su designación, ni éste aceptará el cargo hasta que no se haya abonado la tasa.

ARTICULO 11.- Los fondos que resulten de la percepción de la tasa prevista en el artículo 10 de la presente ley se destinarán a la remuneración de los auxiliares inscriptos en el Registro.

ARTICULO 12.- Los gastos ordinarios que originen la ejecución de las tareas para las cuales fue designado, estarán provisionalmente a cargo del auxiliar, quien deberá liquidarlos en oportunidad de presentar su pericia o informe y se pagarán por el condenado en costas.

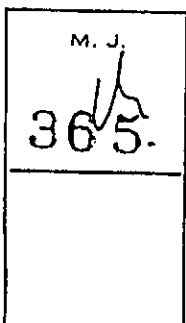
Si los gastos fuesen de naturaleza excepcional será de aplicación lo dispuesto en los artículos 463 del CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL de la NACION y 91 de la Ley N° 18.345.

CAPITULO II

REGISTRO PUBLICO DE DEUDORES MOROSOS

Y REGISTRO PUBLICO DE INCAPACIDAD LABORAL

ARTICULO 13.- Créase en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACION el REGISTRO PUBLICO DE DEUDORES MOROSOS en el que se anotarán las personas físicas y jurídicas condenadas por sentencias firmes en juicios



por cobro de sumas de dinero.

En el Registro se dejará constancia del nombre e identidad del deudor condenado, de la causa de la deuda, los datos del proceso judicial, el Juez o Tribunal que dictó el fallo, el monto y fecha de la condena y el último domicilio real y legal que surja del proceso judicial.

También se anotará la iniciación de juicios ordinarios de repetición que fueran deducidos por los condenados en las sentencias mencionadas en el primer párrafo

ARTICULO 14.- Créase en jurisdicción del citado Ministerio el REGISTRO PUBLICO DE INCAPACIDAD LABORAL, en el que se dejará constancia del grado de incapacidad laboral que afectare a un trabajador, sea por decisión judicial firme o por aplicación del artículo 15 de la ley N° 24.028. En el mismo se tomará nota de todos los datos de identificación del expediente en el cual la incapacidad haya sido reconocida.

ARTICULO 15.- El MINISTERIO DE JUSTICIA dictará la pertinente reglamentación que fijará los aranceles para efectuar las consultas a dichos registros y contendrá las disposiciones sobre la rehabilitación de los anotados en ellos.

ARTICULO 16.- Incorpórase al artículo 38 del CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL de la NACION, como inciso 6°, el siguiente:

"Inciso 6°.- Remitir copia de la sentencia firme condenatoria, y comunicar el inicio de juicios ordinarios de repetición, al REGISTRO PUBLICO DE DEUDORES MOROSOS. Dichos instrumentos deberán ser remitidos dentro del quinto día de haber quedado firme la sentencia o del inicio de las actuaciones y la inobservancia de lo previsto en el presente inciso será considerada como falta grave".

M. J.

365



ARTICULO 17.- Los Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Civil y Comercial Federal y del Trabajo, deberán remitir al REGISTRO PUBLICO DE INCAPACIDAD LABORAL copia de las sentencias firmes que dispongan resarcimientos o indemnizaciones con motivo de incapacidad ocurrida en ocasión de la relación laboral.

La autoridad administrativa que intervenga en las actuaciones previstas en el artículo 15 de la ley N° 24.028 deberá remitir al REGISTRO PUBLICO DE INCAPACIDAD LABORAL copia del acuerdo homologado que pusiese fin al trámite administrativo.

La remisión se efectuará dentro del quinto día de haber quedado firme la sentencia. Se considerará falta grave la inobservancia de lo dispuesto por el presente artículo.

ARTICULO 18.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el término de CINCO (5) años, a establecer por vía de reglamentación los aranceles y retribuciones previstos en la presente ley.

ARTICULO 19.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Dr. RODOLFO CARLOS BARRA
MINISTRO DE JUSTICIA

M. J.

365